

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFJ082452

TRIBUNAL SUPREMO

Auto de 2 de junio de 2021

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Rec. n.º 153/2021

SUMARIO:

Procedimiento de gestión. Obtención de información con carácter general. Obligación de informar sobre mecanismos transfronterizos. En el presente recurso contencioso administrativo se impugna el RD 243/2021 (Mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información). La recurrente denuncia que la exigencia generalizada en un plazo de 30 días de presentación de estos formularios desde junio de 2018 hasta la fecha, sin excepción alguna, determina que los obligados a su presentación deban dedicarle un esfuerzo ímprobo a recuperar expedientes antiguos, de clientes que ya no lo sean a la fecha actual del despacho que actuó como intermediario, circunstancia que también se producirá si existen expedientes antiguos que determinarían la cumplimentación de los formularios informativos y que fueron gestionados o ejecutados por abogados, economistas, asesores o contables que tampoco tienen relación actual con el intermediario que resultaría obligado según esta novedosa normativa, lo que nuevamente obliga a una compleja tarea de recuperación documental de muy difícil cumplimiento. Considera que una obligación tan generalizada y amplia es contraria al principio de proporcionalidad y de minimización de costes indirectos en el establecimiento y exigencia de obligaciones formales, sin que supere los juicios de idoneidad, necesidad o subsidiaridad y proporcionalidad; manifestando que dado que la sentencia que recaiga será posterior a la presentación de los formularios. A la vista de los argumentos utilizados por la parte recurrente ha de concluirse que no le falta razón al Abogado del Estado cuando denuncia la pérdida sobrevenida de objeto de la medida solicitada, porque como se comprueba esencialmente las alegaciones de la recurrente solicitando la medida de suspensión se refiere al régimen transitorio, que concluyó por el transcurso del plazo de 30 días naturales a contar desde 14 de abril de 2021, fecha en que entró en vigor Orden Ministerial HAC/342/2021, sin que quepa obviar que a pesar de disponer de un período de 30 días naturales, la parte recurrente presentó la solicitud de medidas en 13 de mayo de 2021, esto es, un día antes de cumplirse el plazo previsto. Por lo demás, en el esfuerzo de salvar la confusión existente respecto de lo qué es lo realmente solicitado, de entender que está también solicitando la recurrente la suspensión del Real Decreto, ha de convenirse que correspondiéndole la carga de justificar la adopción de una medida cautelar, más cuando se proyecta sobre una disposición de carácter general que prima jurisprudencialmente el criterio restrictivo por la intensidad de los intereses públicos vinculados a su aplicación, claudica absolutamente en dicha obligación al limitarse a valerse de generalidades, haciendo supuesto de la cuestión, tal y como se ha visto, y obviando la trascendencia de la medida en cuanto se pretende preservar de la finalidad legítima del recurso y de la evitación de situaciones irreversibles. Todo lo cual ha de llevarnos a desestimar la solicitud de suspensión cursada.

PRECEPTOS:

RD 243/2021 (Mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información).

PONENTE:

Don José Antonio Montero Fernández.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección: SEGUNDA

Auto núm. /

Fecha del auto: 02/06/2021

PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1

Procedimiento Nº : REC.ORDINARIO(c/d)-153/2021

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Procedencia: T.SUPREMO SALA 3A. SECCION 2A.

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

Transcrito por: CAR

Nota:

PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1

Procedimiento Num.: REC.ORDINARIO(c/d) - 153/ 2021

Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección: SEGUNDA

AUTO

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Rafael Fernández Valverde, presidente

D. José Díaz Delgado

D. José Antonio Montero Fernández

D. Francisco José Navarro Sanchís

D. Isaac Merino Jara

D^a. Esperanza Córdoba Castroverde

En Madrid, a 2 de junio de 2021.

Esta Sala, en su Sección Segunda, ha visto la solicitud de medidas cautelares formulada por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES, representada por la procuradora de los Tribunales D^a. Silvia Vázquez Senín, bajo la dirección letrada de D^o. Esaú Alarcón García.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández.

HECHOS

Primero.

La procuradora de los Tribunales D^a. Silvia Vázquez Senín, en nombre y representación de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES, por medio de escrito presentado con fecha 12 de mayo de 2021, interpuso recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. En dicho escrito, por medio de otro sí digo cuarto, solicitó a la Sala la adopción de Medida Cautelarísima consistente en la suspensión de la vigencia de la Disposición de Carácter General Impugnada, al amparo del artículo 135 de la LJCA, por concurrir circunstancias de especial urgencia.

Segundo.

Dada cuenta, la Sala por auto de 14 de mayo de 2021, al no apreciar la circunstancias de especial urgencia que justificasen la adopción de la medida inaudita parte, acordó no haber lugar a la medida cautelarísima solicitada y continuar la tramitación del incidente de suspensión con la formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares.

Tercero.

Por diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2021, se acordó con la apertura de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, conferir traslado al Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado, para que en el término de 10 días, formulara las correspondientes alegaciones. Trámite que fue evacuado por medio de escrito presentado con fecha 21 de mayo de 2021, en el que suplicaba la denegación de la adopción de la medida cautelar de suspensión solicitada.

Cuarto.

Por diligencia de ordenación de 24 de mayo de 2021, pasaron las actuaciones al Excmo. Sr. Magistrado Ponente, para que proponga a la Sala la resolución que proceda sobre la medida cautelar planteada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. *Objeto sobre el que se proyecta la solicitud de suspensión.*

En el presente recurso contencioso administrativo se impugna el Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

Solicitada por la parte recurrente medidas cautelarísimas se dictó auto denegando las mismas al considerar este Tribunal que no concurría el requisito de la especial urgencia para adoptar una decisión como la solicitada sin oír a la contraparte interesada, de suerte que se continuó la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares para oír a la parte recurrida, tal y como ha acontecido.

Se debe significar que el primer motivo de oposición hecho valer por el Abogado del Estado para rechazar la adopción de la medida cautelar solicitada, es la pérdida de objeto de la medida cautelar por extinción del régimen transitorio con ejecución de los preceptos afectados.

Ciertamente el escrito de la parte recurrente resulta confuso respecto de la concreta medida que solicita, puesto que no queda claro si lo que pide es la suspensión del Real Decreto o sólo el régimen transitorio previsto en el mismo, lo que queda de manifiesto cuando al término de sus alegaciones señala que "de no suspenderse la ejecución del Real Decreto impugnado y, señaladamente, de las normas transitorias citadas, los únicos perjudicados serían los contribuyentes", sin que el desarrollo argumental de su solicitud se desprenda claramente a qué aspira en concreto, así expresamente indica que los preceptos impugnados, y los transcribe, son las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, no hace otra referencia concreta a más preceptos del Real Decreto, afirmando que el régimen transitorio modifica los plazos previstos para la presentación de los modelos 234 y 235, regulados en los arts. 4 y 10 de la Orden Ministerial HAC/342/21, de 12 de abril, que conforme a su disposición final 2ª entró en vigor al día siguiente de su publicación el 13 de abril de 2021 en el BOE. En su solicitud se limita la parte recurrente a justificar, con referencias a pronunciamientos jurisprudenciales, lo procedente de suspender disposiciones de carácter general, analizar la carga que impone el Real Decreto a los contribuyentes e intermediarios y la complejidad de la información a proporcionar y el escaso margen temporal que otorga al tener que aplicarse el régimen transitorio previsto, de suerte que considera que " No puede desconocerse que, la exigencia generalizada en un plazo de 30 días de presentación de estos formularios desde junio desde 2018 hasta la fecha, sin excepción

alguna, determina que los obligados a su presentación 12 deban dedicarle un esfuerzo ímprobo a recuperar expedientes antiguos, de clientes que ya no lo sean a la fecha actual del despacho que actuó como intermediario. De la misma manera, también se producirá la circunstancia de existir expedientes antiguos que determinarían la cumplimentación de los formularios informativos y que fueron gestionados o ejecutados por abogados, economistas, asesores o contables que tampoco tienen relación actual con el intermediario que resultaría obligado según esta novedosa normativa, lo que nuevamente obliga a una compleja tarea de recuperación documental de muy difícil cumplimiento".

Sin solución de continuidad, entra la parte recurrente a denunciar que una obligación tan generalizada y amplia es contraria al principio de proporcionalidad y de minimización de costes indirectos en el establecimiento y exigencia de obligaciones formales, sin que supere los juicios de idoneidad, necesidad o subsidiaridad y proporcionalidad; manifestando que dado que la sentencia que recaiga será posterior a la presentación de los formularios, "la no adopción de la debida medida cautelar de suspensión, y consecuente ejecución de los preceptos de la citada disposición de carácter general, abocaría a los contribuyentes afectados a asumir una carga de imposible cumplimiento". En definitiva, en este párrafo se comprende, si así puede entenderse pues también podría referirse al régimen transitorio, toda la argumentación y justificación dirigida a lograr la suspensión del Real Decreto.

Para terminar la recurrente manifestando la concurrencia del requisito de la especial urgencia y lo oportuno de acoger la medida solicitada inaudita parte.

A la vista de los argumentos utilizados por la parte recurrente ha de concluirse que no le falta razón al Abogado del Estado cuando denuncia la pérdida sobrevenida de objeto de la medida solicitada, porque como se comprueba esencialmente las alegaciones de la recurrente solicitando la medida de suspensión se refiere al régimen transitorio, y como correctamente dice el Abogado del Estado el régimen transitorio concluyó por el transcurso del plazo de 30 días naturales a contar desde 14 de abril de 2021, fecha en que entró en vigor Orden Ministerial HAC/342/2021, sin que quepa obviar que a pesar de disponer de un período de 30 días naturales, la parte recurrente presentó la solicitud de medidas en 13 de mayo de 2021, esto es, un día antes de cumplirse el plazo previsto.

Por lo demás, en el esfuerzo de salvar la confusión existente respecto de lo qué es lo realmente solicitado, de entender que está también solicitando la recurrente la suspensión del Real Decreto, ha de convenirse que correspondiéndole la carga de justificar la adopción de una medida cautelar, mas cuando se proyecta sobre una disposición de carácter general que prima jurisprudencialmente el criterio restrictivo por la intensidad de los intereses públicos vinculados a su aplicación, claudica absolutamente en dicha obligación al limitarse a valerse de generalidades, haciendo supuesto de la cuestión, tal y como se ha visto, y obviando la trascendencia de la medida en cuanto se pretende preservar de la finalidad legítima del recurso y de la evitación de situaciones irreversibles.

Todo lo cual ha de llevarnos a desestimar la solicitud de suspensión cursada.

Segundo. Costas.

Conforme al artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente, si bien haciendo uso de la facultad prevista en el apartado 4 del citado precepto se fija, como cantidad máxima y única a la que pueden ascender por todos los conceptos, la de 2.000€, teniendo en cuenta los criterios habitualmente seguidos.

Por todo lo cual,

La Sala

ACUERDA

No ha lugar a la medida cautelar solicitada, con imposición de costas en los términos del último de los fundamentos de este auto.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.